



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

125059/ 2018

HECTOR A, BERTONE S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - D.G.I. s/ IMPUGNACION DE DEUDA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, .-

VISTO:

El recurso extraordinario de apelación interpuesto por la representación jurídica de la demandada en contra de la resolución de fecha 4 de marzo de 2019 (v. *fojas 292/294-digitales*-) dictada por este Tribunal que revoca la resolución impugnada:

Y CONSIDERANDO:

I.-En orden a la procedencia formal del remedio federal deducido, cuadra señalar que el recurrente interpuso el mismo, en principio de acuerdo a las pautas ordenadas por la Acordada 4/2007 de la C.S.J.N., el día 27 de julio de 2019 (v. *fojas 295/338-digitales*-.). Es decir, en legal tiempo y forma y, en consecuencia, corresponde proceder a su análisis

II.- La accionada, en su presentación, manifiesta que la decisión proviene del Superior Tribunal de la causa y que la misma reviste carácter de sentencia definitiva. Invoca, que en el caso existe cuestión federal en los términos del art. 14, *inc.* 3 de la Ley 48, -inaplicación de normas federales (CN arts. 14, 14 bis, 16, 17 y 18), Ley 25.401 art. 45; Ley N° 23.696, Decreto 814/01. Relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en autos. Finalmente, alega arbitrariedad de sentencia y gravedad institucional.

Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con fecha 28 de julio de 2020, el mismo fue contestado por la parte actora a *fojas 340/349 (digitales)* solicitando el rechazo de dicho remedio federal, quedando la causa en estado de ser resuelta.

III.- En punto a la cuestión federal alegada por el organismo demandado, corresponde señalar que dicha parte pretende introducir por la vía excepcional del recurso extraordinario cuestiones de valoración de hecho, prueba y derecho procesal, cuya revisión por principio no es permitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto ha declarado en innumerables casos que es improcedente el recurso extraordinario fundado en agravios desechados sobre la base de fundamentos que no compete a ese tribunal examinar (Fallos: 312:1859, 325:2192; 326: 1877, 343:595; 343:840; 343:1929; entre otros).



Insiste de modo vago que el tema discutido gira en torno a los alcances del régimen de alícuotas determinadas por el Decreto 814/01, dictado en el marco de las contribuciones y facultades instituidas por las leyes 9.032, 20.744, 23.660, 23.661, 24.013 24.241. 24.700, 24.714, 25.250, 25.413 y 25.414. Pero no argumenta porque en el *sublite* se halla en juego la interpretación de normas federales y dicha situación encuadra en lo previsto por el art. 14 inc. 3 de la ley 48.

Cabe agregar al respecto, que es jurisprudencia del Tribunal Címero que “es improcedente el recurso extraordinario si no refuta todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada” (conf. Fallos: 330:16; 321:3158; 321:1031; 313:1202)

Ello es así porque sólo con carácter excepcional puede admitirse la intervención de la Corte cuando los planteos efectuados en el recurso extraordinario revelen en forma nítida, inequívoca y concluyente un grave menoscabo a las reglas del debido proceso que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa (conf. Fallos: 323:2801; 324:1924 y 330:4749; 331:2195; 343:2184 entre otros). Empero dichas circunstancias no se dan en autos.

IV.- Respecto de la arbitrariedad del decisorio impugnado por la parte recurrente, dicha doctrina “tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso (art. 18, Constitución Nacional), exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias efectivamente comprobadas en la causa” (fallos: 343:2280; 343:354; 342:1023; 341:870; 340:1283; 331:583; 330:1083; 329:4524; 329:432; 321:2981). -

Así, en las presentes actuaciones no se advierte que los argumentos que esgrime la quejosa logren abrir la instancia extraordinaria, pues sólo evidencian discrepancias con el criterio empleado por el Tribunal en la apreciación de los diversos elementos de juicio incorporados al proceso y con la solución final adoptada, lo cual no basta para configurar la tacha de arbitrariedad alegada. Además, tiene dicho el Máximo Tribunal. que la doctrina de la arbitrariedad exige, entre otros requisitos, para la habilitación de esta última instancia excepcional, acreditar la violación concreta a las garantías constitucionales y no la mera disconformidad del recurrente con el mérito que efectuó el Tribunal Juzgador (Fallos: 331:477; 329:3949; 324:4300; 323:262, 488; 322:792, entre muchos otros).- Extremo éste, que ha sido incumplido desde que la recurrente no ha sido concreta en sus agravios (v. *fojas 262/287-digitales*).

En tal sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido que la mencionada doctrina, no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en la solución de las cuestiones que les son privativas, ni abrir una tercera instancia para debatir temas no federales (Fallos: 207:72; 306:1395; 331:1040; 331:2586; 341:1130), ni tampoco tiene por finalidad la corrección de fallos que se consideren equivocados, sino que sólo admite los supuestos de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

desaciertos y omisiones de gravedad extrema, o pueden ser descalificados al observarse deficiencias lógicas o violación de las reglas de la sana crítica, a causa de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 306:1111; 342: 1847, entre otros).

En suma, en la sentencia dictada por esta Sala, se han apreciado críticamente el material fáctico del pleito y meritado todas las circunstancias e implicancias oportunamente incorporadas al proceso, no habiéndose configurado así un supuesto de arbitrariedad que proporcione fundamento alguno a la apelación extraordinaria (ver SAGÜES, Nestor P. “El recaudo de la fundamentación como condición de la sentencia constitucional”, en ED T° 97, pág. 943). En su mérito corresponde concluir que en la presente causa no concurren las circunstancias que hacen procedente la causal analizada.

V.- Finalmente, la impugnante, en su recurso manifiesta que la peculiar relevancia de las cuestiones involucradas y decididas en autos, excede el mero interés particular y atañe al de la comunidad, configurando un supuesto de gravedad institucional que habilita la instancia extraordinaria (Fallos: 247:601; 255:41; 290:266; 292:229; 293:504; 307:770;307:919; 317:1076; 324:533; 341:939; 342:287; entre muchos otros).

No nos encontramos en presencia de la gravedad institucional que permite habilitar esta vía excepcional.

Ello por cuanto la apelante no logró demostrar que la cuestión invocada tiene virtualidad para afectar el interés de toda la comunidad, principios del orden institucional o el fondo las instituciones básicas de la Nación (SAGÜES, Nestor P. (2018) Compendio de Derecho Procesal Constitucional, 3° reimpresión, Astrea, Buenos Aires, Argentina, p. 267 y sgte.).

Corresponde, entonces desestimar por insustancial la alegada gravedad institucional si el punto no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia.

VI.- Por las consideraciones expuestas precedentemente, corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto por la representación letrada de la accionada en contra de la Sentencia dictada por este Tribunal con fecha 4 de marzo de 2019. Con costas (conf. art. 68 1° párrafo C.P.C.C.N). -

Por último, con relación al mérito de la labor desarrollada por la parte actora en su contestación del recurso extraordinario federal que nos ocupa, corresponde regular sus honorarios en la suma de \$ 18.002,00 (pesos dieciocho mil dos) que equivalentes al día de la fecha a la cantidad de 2 (dos) UMAS conforme artículos 15, 19, 20, 36,51 y 58 de la ley 27.423, art. 1255 CCCN y AC



CSJN 12/2022. Al monto regulado deberá adicionársele el IVA, en caso de corresponder. (cfr C.S.J.N. “Compañía General de Combustibles SA s/ Recurso de Apelación”, sentencia del 16 de junio de 1993; Fallos: 316:1533).

Por ello, a mérito de lo que resulta del presente, el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:** 1º). - Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada en contra de la Sentencia de fecha 4 de marzo de 2019 dictada por esta Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, por las consideraciones expuestas, con costas (conforme artículo 68 del C.P.C.N.). 2º) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en la suma de \$ 18.002,00 (pesos dieciocho mil dos) que equivalentes al día de la fecha a la cantidad de 2 (dos) UMAS conforme artículos 15,19,20,36,51 y 58 de la ley 27.423, art. 1255 CCCN y AC CSJN 12/2022. El monto indicado no incluye la alícuota correspondiente al IVA, que deberá adicionarse en caso de corresponder (Conf. Fallos: 316:1533). 3º). - Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y devuélvanse. -

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara
(en disidencia)

WALTER FABIAN CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

ANTE MÍ: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Vuelven las presentes actuaciones en virtud del recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada que se dirige contra el pronunciamiento de esta Sala, contestado por la parte actora. Toda vez que el mismo cumple con los recaudos exigidos por la Acordada n° 4/07 de la C.S.J.N, corresponde proceder a su análisis.

En autos la Administración Federal de Ingresos Públicos presenta recurso extraordinario cuestionando la decisión adoptada mayoritariamente por esta Sala, referente a la proyección y aplicación del decreto 814/2001 que fijó alícuotas específicas en materia de contribuciones patronales beneficiadas por reducciones.

El recurso extraordinario en nuestro medio se encuentra reglamentado por el art. 14 de la ley 48.

Se trata de un remedio excepcional cuyo objetivo es tutelar la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

primacía del derecho federal respecto de sentencias provinciales, proteger la supremacía de la Constitución y demás normas de carácter federal aun contra sentencias de los tribunales federales y por último uniformar la aplicación del derecho federal (ver Sagües, Néstor Pedro “Elementos de Derecho Constitucional” Tº I pág. 313, ed. Astrea) con la finalidad estrictamente política de lograr la subsistencia del Estado Federal (Sabsay, Daniel A. “Manual de Derecho Constitucional” pág. 686, ed. La Ley; Ziulu, Adolfo G. “Derecho Constitucional” págs. 855/6, ed. Abeledo-Perrot).

El artículo 14 inc. 3, de la ley 48 establece, en la parte que nos interesa, que cuando una ley del Congreso o una comisión ejercitada en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión haya sido contra la validez del título, derecho, privilegio o exención en que se funda dicha cláusula será admisible el recurso extraordinario.

En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante un decreto del Poder Ejecutivo emitido en los términos del art. 99 inc. 1º y 2º de nuestra Magna y lo discutido es la recta interpretación de sus alcances teniendo presente que su sanción tuvo como objetivo institucional, establecer las bases para el crecimiento sostenido de la economía, la competitividad y el aumento del empleo mediante la reducción de los costos de producción a cuyo fin se fijaron alícuotas diferenciales en materia de contribuciones empresarias.

Cabe señalar, asimismo, que nos encontramos con una normativa dictada por razones de emergencia con un fin institucional concreto, esto es, lograr la reversión de un estado de postración económica y social, lo que justifica a mi juicio que sea nuestro Máximo Tribunal de Justicia quien fije los lineamientos jurídicos respecto a la citada norma reglamentaria.

En virtud de lo anterior, por razones de orden federal y de seguridad jurídica, no resulta irrazonable considerar aplicable, a la situación bajo estudio, las directivas del art. 14, inc 3º, de nuestra Ley Fundamental por lo que propongo: 1º) Conceder el recurso extraordinario interpuesto, 2º) Notifíquese y oportunamente elévese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sirviendo la presente de atenta nota de envío.

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

MJL

